

**República de Colombia**  
**Rama Judicial del Poder Público**



**Juzgado Diecinueve Civil Municipal**

Bogotá D C, veinticinco (25) de marzo de dos mil veintidós (2022).

**Ref. 2020-00096**

**Radicado No.:** 11001 40 03 019 2020 00096 00  
**Demandante:** EMILIO JOSE MORA BENAVIDES  
**Demandado:** LUIS LIZCANO CONTRERAS  
**Proceso:** Ejecutivo singular.  
**Instancia:** Única instancia.

**I. ASUNTO A TRATAR**

Procede el despacho a proferir sentencia dentro del proceso ejecutivo singular promovido por EMILIO JOSÉ MORA BENAVIDES contra LUIS LIZCANO CONTRERAS.

**II. ANTECEDENTES**

**Pretensión**

El señor Emilio José Mora Benavides, actuando por conducto de apoderado judicial, instauró demanda ejecutiva singular de menor cuantía contra Luis Lizcano Contreras con el fin de obtener el pago de la suma de \$90.000.000 m./cte por el valor del capital incorporado en el pagaré No. 1 aportado como base de la ejecución, junto con los intereses de mora liquidados a una tasa nominal mensual del 1.5 veces del IBC mensual sobre el saldo que llegue a estar vencido, desde el 29 de agosto de 2019 hasta que se verifique su pago (fl. 4 c.1).

**Fundamentos fácticos**

Para fundamentar sus pretensiones la parte actora adujo, en síntesis, que:

1. El demandado Luis Lizcano Contreras suscribió el pagare No. 1, en el cual se obligó a pagar a favor del señor Emilio José Mora Benavides, acá demandante, la suma de \$90.000.000, en un plazo máximo de 24 meses o a más tardar el 28 de agosto de 2019.
2. El convocado se encuentra en mora desde el mes de agosto de 2019 y el pagaré base de la ejecución contempla una obligación clara, expresa y actualmente exigible.

**III. ACTUACIÓN PROCESAL**

**1)** Mediante auto adiado el 25 de febrero de 2020 se libró mandamiento de pago a favor de Emilio José Mora Benavides contra el señor Luis Lizcano Contreras, por las sumas de: **i)** \$90.000.000 m/cte por concepto del capital contenido en el título objeto de recaudo; y **ii)** intereses de mora sobre el capital anterior, liquidados a la tasa máxima certificada mes a mes por la Superintendencia Financiera de Colombia, desde el 29 de agosto de 2019, hasta que se verifique el pago total de lo adeudado. (fl.17 c.1).

**2)** El demandado se notificó a través de curador *ad-litem*, quien dentro del término legal se opuso a las pretensiones del libelo formulando como excepciones las denominadas:

**i) “PRESCRIPCIÓN”,** la cual fundamentó en que la obligación incorporada en el pagaré No. 1 aportado como base de la ejecución, fue diligenciado con fecha del 28 de agosto de 2017, se encuentra afectado por el fenómeno de la prescripción por haber transcurrido más de 3 años, sin que se hubiese notificado al demandado y con la presentación de la demanda se hubiese interrumpido el término prescriptivo, habida cuenta que el mandamiento de pago no se notificó al extremo ejecutado dentro del año siguiente en los términos del artículo 94 del C.G.P., circunstancia que sólo se produjo hasta el 19 de mayo del año inmediatamente anterior lo que vuelve completamente inoperante la continuidad de la presente acción ejecutiva.

**ii) “NO ES TÍTULO EJECUTIVO”** indica que el pagaré base de esta litis, no cumple con los requisitos del artículo 422 de la normativa en mención, puesto que, no es una obligación clara y no es inteligible, ya que, el interés de mora pactado en 1.5 veces del IBC sobre el saldo vencido, se entiende que no es claro en cuanto a que, este indicador se toma como base para aplicar el porcentaje de aporte respectivo al Sistema General de Seguridad Social, y no se indica si es de un trabajador dependiente o independiente, dado que, es diferente el porcentaje del aporte en cada caso, por lo que, considera que se supera el tope máximo de la tasa de usura, así también, menciona que no hay claridad en la cláusula segunda del pagaré, pues no se entiende si debe ser pagado a cuotas o bien al final del periodo otorgado.

**iii) “EXCEPCIÓN GENÉRICA”.**

#### **IV. PROBLEMA JURÍDICO**

El problema jurídico a resolver en este caso es determinar si se debe ordenar seguir adelante la ejecución por reunirse los requisitos para ello, o si los medios exceptivos propuestos por el auxiliar de la justicia, designado para representar al extremo pasivo, logran enervar la obligación contenida en el título báculo de la acción ejecutiva.

#### **V. CONSIDERACIONES**

**5.1.** En el proceso se han cumplido los presupuestos procesales, en efecto, este Juzgado es el competente, la demanda reúne las exigencias legales y la existencia y representación de las partes se encuentran demostradas; tampoco existe causal alguna generadora de nulidad que invalide total o parcialmente la actuación surtida en el proceso.

**5.2.-** De igual forma, se encuentra acreditado el presupuesto de la acción ejecutiva, denominado legitimación en la causa, pues la ley sustancial, concretamente el artículo 422 del Código General del Proceso, establece: “...Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez”.

A su vez, los artículos 781 y 782 del Código de Comercio, establecen que la acción cambiaria directa la puede ejercitar el último tenedor para reclamar el pago contra el aceptante de una orden o el otorgante de una promesa cambiaria o sus avalistas.

De manera que, tiene legitimación en la causa por activa el acreedor, en el caso de la acción cambiaria el último tenedor, y por pasiva el extremo

deudor, es decir, en este caso el aceptante de una orden o el otorgante de una promesa cambiaria o sus avalistas.

Calidades que en el caso de estudio se encuentran acreditadas, toda vez que, en los documentos allegados como base de la acción, se advierte que el último tenedor es Emilio José Mora Benavides, a favor de quien se otorgó el cartular y quien presenta acá la demanda, así como que el otorgante del pagaré fue el señor Luis Lizcano Contreras, acá demandado.

**5.3.** Ahora bien, observa el Despacho que el instrumento cambiario aportado como base de ejecución, esto es, el pagaré número 1 suscrito por el señor Luis Lizcano Contreras contienen los requisitos decantados en los artículos 621 y 709 del Código de Comercio, puesto que se desprende la firma de quien los creó y la mención del derecho que se incorpora; así como contienen la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero (\$90'000.000); así como el nombre de la persona a quien debía hacerse le pago, en este caso Emilio José Mora Benavidez; la indicación de ser pagadero a la orden, y forma de vencimiento, esto es, a una fecha cierta y determinada.

En este orden de ideas, advierte este Despacho que el mandamiento de pago fue librado de conformidad a lo que correspondía, por lo que es necesario adentrarnos al estudio de las defensas propuestas por la pasiva.

#### **5.4. Excepciones:**

El ejecutado, dentro de la oportunidad consagrada por la ley, puede proponer defensas y excepciones y solicitar las pruebas que la respalden.

Facultad debidamente ejercida en el sub-lite, en el que la parte demandada a través de apoderado judicial controversió el proveído intimidatorio con las denominadas: “*prescripción, no es título ejecutivo y la genérica*”, de las cuales se realizara su estudio teniendo en cuenta las pruebas y fundamentos aportados para su apoyo.

##### **5.4.1. Prescripción:**

Se fundamentó en que la obligación incorporada en el pagaré No. 1 aportado como base de la ejecución, fue diligenciado con fecha del 28 de agosto de 2017, se encuentra afectado por el fenómeno de la prescripción por haber transcurrido más de 3 años, sin que se hubiese notificado al demandado y con la presentación de la demanda se hubiese interrumpido el término prescriptivo, habida cuenta que el mandamiento de pago no se notificó al extremo ejecutado dentro del año siguiente en los términos del artículo 94 del C.G.P., circunstancia que sólo se produjo hasta el 19 de mayo del año inmediatamente anterior lo que vuelve completamente inoperante la continuidad de la presente acción ejecutiva.

1. Al respecto, se advierte que el fenómeno de la prescripción puede acogerse a través de dos conceptos diferentes, de un lado como un modo de adquirir el dominio de las cosas pues en virtud de la posesión por un período determinado y con el cumplimiento de los requisitos legales exigidos, se obtiene el derecho real de los bienes ajenos corporales, raíces o muebles que se encuentran en el comercio humano, de otro lado, como una forma de extinguir las acciones y derechos personales, cuando éstos no se han ejercido en un lapso considerable determinado por el legislador, denominándose **prescripción extintiva o liberatoria** sin que ello implique que se encuentre en discusión la titularidad de las cosas. De manera que para que sea aplicable la figura en comento se requiere **i)** El transcurso del tiempo, **ii)** inactividad del acreedor, **iii)** alegarse expresamente, pues no opera de oficio sino a solicitud de parte **iv)** que no se haya renunciado,

suspendido o interrumpido el término de prescripción, sobre el particular la Corporación en cita ha señalado que:

*“La prescripción liberatoria o extintiva de derechos personales es un modo de extinguir los derechos y las acciones a consecuencia del transcurso de un lapso predeterminado en la ley, sin que el titular de esos derechos y acciones los haya ejercido. Su consolidación se supedita a que la acción sea prescriptible, que es la regla general, a que transcurra el tiempo legalmente establecido teniendo en consideración la interrupción y suspensión de que puede ser objeto; y a que el titular del derecho de acción se abstenga en ese tiempo de ejercer el derecho en la forma legalmente prevenida.*

*La prescripción extintiva puede ser de largo o corto tiempo, y sobreviene con el cumplimiento de los requisitos mencionados, pero al paso que la primera exige el transcurso de diez años (en el caso de la ordinaria y cinco en la ejecutiva la segunda)”<sup>1</sup>*

Bajo esta perspectiva en punto de la materialización de la prescripción es menester que concurren tres sujetos pues se itera no opera de pleno derecho siendo menester alegarla en el transcurso del proceso. Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia 091 de 2018 precisó:

*“La prescripción extintiva ante la Jurisdicción Ordinaria requiere, para su configuración, la participación de tres sujetos: el acreedor o titular del derecho que no exigió su cumplimiento o ejecución a tiempo, el deudor o sujeto pasivo de la relación jurídica que alegó la ocurrencia de la prescripción como excepción y así se opuso a su realización y el juez que la declaró en la sentencia. La falta de la participación de cualquiera de los tres sujetos, impide la configuración de la prescripción.”*

Ahora como se expresó en líneas precedentes, el término prescriptivo es susceptible de interrupción o renuncia, eventos en los cuales el lapso que había comenzado a transcurrir se suprime y la misma no puede consumarse debiendo iniciarse un nuevo periodo, es decir se revive nuevamente la acción cambiaria en cabeza del acreedor. Una de las formas de borrar el término prescriptivo que ha corrido y, por consiguiente, revivir el derecho de acción que le asiste al acreedor, es la **interrupción** que puede ser de manera civil o naturalmente al tenor de lo dispuesto en el artículo 2539 del Código Civil acaeciendo lo primero, cuando se presenta la demanda instaurada por el acreedor para exigir el cumplimiento de la obligación, y lo segundo, en el evento en que el deudor reconoce ya sea expresa o tácitamente la obligación a su cargo bien porque la confiesa o hace abonos, paga intereses etc.<sup>2</sup>

No obstante lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo 94 del Código General del Proceso para que la presentación de la demanda posea la virtualidad de interrumpir el término de prescripción, se debe realizar la intimación al demandado dentro del lapso de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación del auto admisorio al demandante o el mandamiento de pago al ejecutante, siendo así, en los términos del artículo 789 del Código de Comercio la acción cambiaria que se deriva del título valor pagaré prescribe en el término de tres (3) años contados a partir del día de vencimiento.

Sin embargo, la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia, en reiteradas oportunidades al interpretar las normas que regulan el término extintivo, ha señalado que dicho plazo no opera de manera automática, sino que debe observarse desde una perspectiva subjetivista, cuyo fin es el de evitar las consecuencias nocivas de demandas que se interponen con premeditada tardanza, pero también la extinción de derechos sustanciales, por causas no atribuibles a quien legítimamente los reclama, así:

---

<sup>1</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil SC6575-2015 M.P. Jesús Vall de Ruten Ruiz.

<sup>2</sup> *Ibidem*.

*“... la interrupción civil – tiene dicho la Corte- de la prescripción tanto adquisitiva como extintiva, a consecuencia de la interposición de la demanda no se consuma con la sola presentación de la demanda, sino en el momento en el que se notifica al demandado, salvo que el retardo en notificar a este no se deba a culpa del demandante, por no haber realizado la actividad necesaria para que dicha notificación se efectuara, sino al demandado, por haber eludido esta, o al personal del juzgado encargado de hacerla, casos estos en los cuales la interrupción se entiende consumada con la presentación de la demanda” (subrayas y negrillas fuera de texto) (G.J. números 2032, pág. 634 y 658; 2050 pág. 660; 2154, pág 132; 2318, pág. 120)”*

*“Es decir, que si a pesar de la diligencia del actor, el auto admisorio de la demanda no logra notificarse en tiempo a los demandados debido a evasivas o entorpecimiento de estos o por demoras de la administración de justicia o de otro tipo, que no sean imputables al reclamante, el ejercicio oportuno de la acción con la presentación de la demanda tiene la virtud de impedir que opere la caducidad. Este criterio conserva plena vigencia, por estar inspirado en los supremos ideales de justicia y equidad, adaptados al derecho objetivo, a tal punto que a pesar de la doctrina antigua consideró que el concepto de caducidad estaba ligado a la idea de plazo extintivo e improrrogable – cuyo vencimiento produce el decaimiento de la acción de manera inevitable y sin tomar en consideración la actividad del juez o de las partes-, ello no fue obstáculo para que esa noción eminentemente teórica o especulativa cediera su rigor ante los supuestos concretos que plantea la realidad que está a la base del derecho actual”<sup>1</sup>.*

De ahí que la correcta interpretación de la norma que rige el caso impone al juez la obligación de tomar en consideración las referidas circunstancias subjetivas, a fin de no endilgar a la parte demandante unas consecuencias nocivas que no le son en modo alguno atribuibles por no ser producto de su negligencia.

2. Conforme a las anteriores precisiones, debe entrar el Despacho a determinar si en efecto operó el medio exceptivo propuesto, para lo cual, en principio, ha de tenerse en cuenta la fecha de exigibilidad del título aportado como base de recaudo, la data en que se interpuso la demanda y la fecha en que se notificó el mandamiento de pago al extremo ejecutado.

Bajo esta perspectiva, descendiendo al caso objeto de estudio se advierte que el pagaré No. 1 tiene como fecha de exigibilidad el día **29 de agosto de 2019** de donde se colige que el término de prescripción de los 3 años de que trata el artículo 789 en cita, en principio se cumplía el **29 de agosto de 2022**.

De otro lado, se evidencia que la demanda fue presentada a reparto el 18 de diciembre de 2019 (f. 10), es decir, con la presentación del libelo introductor, teóricamente se interrumpió el término de prescripción previsto en el estatuto mercantil siendo menester determinar el momento en que se integró el contradictorio.

Entonces, del expediente se desprende que el mandamiento de pago se notificó por estado a la parte actora el 26 de febrero de 2020 (fl 17) lo que implica, que ésta contaba hasta el 26 de febrero de 2021 para enterar a la demandada acerca del contenido de la orden de apremio librada, a fin de lograr la interrupción de la prescripción con la presentación de la demanda, circunstancia que solo se perfeccionó hasta el 19 de noviembre de 2021, a través de curador *ad-litem* (archivo 22 expediente digital), lo que de suyo permite colegir que para la fecha de notificación a la ejecutada, las obligaciones derivadas del título báculo de la acción, no se encontraban afectadas por el fenómeno de la prescripción, pues si bien, se notificó por fuera del año concedido para la integración del contradictorio, como se indicó en apartes anteriores el demandante contaba hasta el 29 de agosto de 2022, para que terminará los tres años de la prescripción cambiaria directa.

Por tanto, es posible concluir que efectivamente la parte demandante asumió las cargas procesales que le eran propias, pues antes de que venciera el término consagrado por el legislador para impedir que operara la prescripción, procuró no sólo la notificación de la deudora, sino que ante el resultado negativo de la misma pidió el emplazamiento del ejecutado y la designación de un curador *ad-litem*, razón por la cual impidió que la excepción de prescripción pueda prosperar.

#### 5.4.2. “NO ES TÍTULO EJECUTIVO”.

Se indica por la pasiva que, el pagaré base de esta litis, no cumple con los requisitos del artículo 422 de la normativa en mención, puesto que, no es una obligación clara y no es inteligible, ya que, el interés de mora pactado en 1.5 veces del IBC sobre el saldo vencido, se entiende que no es claro en cuanto a que, este indicador se toma como base para aplicar el porcentaje de aporte respectivo al Sistema General de Seguridad Social, y no se señala si es de un trabajador dependiente o independiente, dado que, es diferente el porcentaje del aporte en cada caso, por lo que, considera que se supera el tope máximo de la tasa de usura, así también, menciona que no hay claridad en la cláusula segunda del pagaré, pues no se entiende si debe ser pagado a cuotas o bien al final del periodo otorgado.

Para resolver, debe señalarse que el proceso ejecutivo se inicia con un documento que debe reunir unos requisitos dispuestos en el artículo 422 del Código General del proceso, esto es, uno que debe contener una obligación clara expresa y exigible, además de ser plena prueba contra el deudor. Respecto al primer de los requisitos, la **claridad**, implica que la obligación en él contenida se encuentre estructurada de forma lógica, racional y precisa, de manera que, exista plena certeza respecto del objeto de la prestación y de los individuos intervinientes, la persona que se encuentra obligada a cumplir, así como, aquel en favor de quien se ejecutará la misma.

Frente al presupuesto de **expresividad**, éste consiste en que el contenido del documento debe ser entendible sin que haya lugar a realizar una interpretación más allá de la información plasmada en el cuerpo del título basándose en suposiciones o presunciones que den cuenta de la existencia o condiciones de la obligación y finalmente, **la exigibilidad** determina que la obligación pueda ser cobrada por cuanto debe incorporar la forma de vencimiento estando ligada íntimamente al plazo y la condición.

En tal sentido, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en el estudio de una acción constitucional, con relación a este tópico precisó:

***“La claridad de la obligación, consiste en que el documento que la contenga sea inteligible, inequívoco y sin confusión en el contenido y alcance obligacional de manera que no sea oscuro con relación al crédito a favor del acreedor y la deuda respecto del deudor. Que los elementos de la obligación, sustancialmente se encuentren presentes: Los sujetos, el objeto y el vínculo jurídico. Tanto el préstamo a favor del sujeto activo, así como la acreencia en contra y a cargo del sujeto pasivo.***

***La expresividad, como característica adicional, significa que la obligación debe ser explícita, no implícita ni presunta, salvo en la confesión presunta de las preguntas asertivas. No se trata de que no haya necesidad de realizar argumentaciones densas o rebuscadas para hallar la obligación, por cuanto lo meramente indicativo o implícito o tácito al repugnar con lo expreso no puede ser exigido ejecutivamente. Tampoco de suposiciones o de formulación de teorías o hipótesis para hallar el título. Y es exigible en cuanto la obligación es pura y simple o de plazo vencido o de condición cumplida.”***<sup>3</sup> (énfasis del despacho).

---

<sup>3</sup> CSJ, Sala de Casación Civil y Agraria STC3298-2019, M.P. Luis Armando Tolosa

Ahora, tratándose de títulos valores se deben distinguir unos elementos esenciales generales, es decir, comunes a todos los títulos valores, consagrados en el artículo 621 del Código de Comercio, a saber: **i)** La mención del derecho que en el título se incorpora y, **ii)** la firma de quien lo crea, además de unas exigencias particulares, que para el caso del pagaré se encuentran dispuestas en el artículo 709 ibídem, como son: **i)** la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, **ii)** el nombre de la persona a quien deba hacerse el pago, **iii)** la indicación de ser pagadero a la orden o al portador y **iv)** la forma de vencimiento.

En aras de satisfacer tal exigencia, el extremo demandante aportó con el libelo introductor el pagaré número 1 suscrito por el señor Luis Lizcano Contreras mediante el cual se obligó a cancelar a la orden de Emilio José Mora Benavides, la suma de \$90.000.000 m./cte por concepto de capital y un valor correspondiente a los intereses de mora de 1.5 veces el IBC sobre el saldo exigido y evidenciándose como fecha de vencimiento el día 28 de agosto de 2019.

De manera, tal como se señaló líneas atrás, el título valor objeto de reproche cumple con los mencionados requisitos, por consiguiente, no se comparte la afirmación de que no es una obligación clara, en el sentido que en el pagaré se pactan intereses de mora con base al IBC (ingreso base de cotización), pues si bien, esta no es una medida acorde para lo solicitado, tampoco es un requisito sin el cual no se cumpla con los parámetros esenciales para la procedencia del mismo.

Asimismo, no es de recibo la aseveración de que no es exigible el título valor, por no ser claro respecto que el pago de la obligación se debe realizar en cuotas o bien en su totalidad al finalizar el plazo, por lo que, encuentra el despacho que no hay razón evidente para tal afirmación, puesto que, en la cláusula tercera se expresa con claridad que el plazo acordado para el pago es de veinticuatro meses o a más tardar el 28 de agosto de 2019, sin indicar ningún pago de cuotas anterior a la fecha de exigibilidad del título, tanto es así que, no se pactaron intereses corrientes durante el mencionado plazo, por consiguiente, se acredita la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a cargo del extremo demandado y a favor de la ejecutante, es decir, reúne los requisitos del artículo 422 del C. G. del P. y por tanto presta mérito ejecutivo.

#### **5.4.3. Excepción genérica.**

Solicita la pasiva que se dé aplicación al reconocimiento de la excepción que se encuentre probada en el expediente y que no fue alegada.

Dispone el artículo 282 del Código General del Proceso que: *“En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda”.*

Sin embargo, en este caso no encuentra el Despacho hechos que puedan constituir una excepción de las que el juez pueda declarar de oficio, o que en realidad se hayan demostrados hechos que puedan constituir alguna de aquellas.

**5.5.** De lo anterior deviene la improsperidad de las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada y, en consecuencia, se ha de ordenar seguir adelante con la ejecución, en la forma dispuesta en el mandamiento de pago.

## **VI. DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto el **Juzgado Diecinueve (19) Civil Municipal de Bogotá D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

**VII. RESUELVE**

**PRIMERO: DECLARAR** infundadas las excepciones de mérito planteadas por el extremo demandado, por las razones consignadas en esta providencia.

**SEGUNDO: ORDENAR** seguir adelante la ejecución conforme el mandamiento de pago librado.

**TERCERO:** Decretar la venta en pública subasta los bienes embargados al demandado y los que posteriormente se llegaren a embargar.

**CUARTO:** Practíquese la liquidación del crédito conforme lo normado en el artículo 446 del C. G. del P.

**QUINTO:** Condenar en costas de esta instancia a la parte demandada y a favor de la parte ejecutante. Para lo cual téngase como agencias en derecho la suma de \$5.000.000 m./cte.

Liquídense.

**Notifíquese y cúmplase,<sup>4</sup>**

**IRIS MILDRED GUTIÉRREZ  
JUEZ**

Firmado Por:

**Iris Mildred Gutierrez  
Juez Municipal  
Juzgado Municipal  
Civil 019  
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ba6c8e8aa7081d13a34e7dd137f61ab5cf6485c85c88b9298c3004e335b96c6f**  
Documento generado en 25/03/2022 11:53:44 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

---

<sup>4</sup> Este proveído se notificó por estado No. 030 de 28 de marzo de 2022.